

LA VIOLACION DE LA "NO INJERENCIA"

LA forma en que los Estados Unidos y sus aliados occidentales intervienen en la política interior es una; su intervención visible en la política interior española, que tanta indignación —y tanto juego— han provocado en las Cortes es otra. Y muy distinta. La intervención sobre Italia es fría y seca, según la "indiscreción" —calculada, premeditada— de Helmut Schmidt, apoyada por Ford, medio desmentida por Gran Bretaña, deplorada pero no negada por Francia: los cuatro países han decidido bloquear económicamente a Italia en el caso de que los comunistas toquen una brizna de poder en el país, o formen parte de un Gobierno de unión nacional.

Se trata de algo muy concreto y muy claro. Italia, en una situación política enrevesada y difícil, ha de dejar fuera del Gobierno un partido legal que representa trece millones de votos o exponerse a un colapso económico cierto. Los círculos conservadores dan la razón a esta amenaza: Europa está formada como un conglomerado anticomunista por la OTAN, por el Mercado Común: hay formada una "Santa Alianza". Habría que despejar bien el fondo de la cuestión: no se trata tanto de una guerra de contención contra la URSS —poco inclinada ahora a buscar expansiones ni aventuras— como de evitar una serie de reivindicaciones sociales que están amenazando a la organización, al sistema capitalista. En este sentido la insistencia del Partido Comunista Italiano, como la del francés y la del español, en su no dependencia de Moscú, incluso en su disidencia con la URSS, apenas importan. Importa que con partidos en la vanguardia de las reivindicaciones sociales en un momento determinado de crisis: una crisis del sistema capitalista que recorta o restringe la llamada "opulencia" de las "sociedades de consumo" y que tiende, como es lógico, a depositar en los sectores de trabajo de cada entidad nacional, y en el conjunto europeo, el peso de la crisis y de la escasez. Después de unos años de adormecida o disfrazada, la lucha de clases vuelve. Ha estado disfrazada porque las clases tradicionalmente oprimidas en Europa estaban representando impunemente un papel de opresoras: estaban participando del botín del Tercer Mundo. La riqueza de esa explotación se repartía mal, pero se repartía: la "sociedad opulenta" se ha nutrido de ella. Ciento que los grupos intelectuales de la izquierda se han solidarizado siempre con

ese Tercer Mundo, por encima de las indentidades nacionales o supranacionales: como en Francia durante la guerra de Indochina y la de Argelia, como en Estados Unidos contra la del Vietnam. Pero las clases proletarias, despolitizadas, han participado del botín. Una cier-

supone una enmienda del Senado sin ningún valor ejecutivo recomendando que el Tratado ayude a restablecer la democracia en nuestro país es una simplicidad y una hipocresía. Los Estados Unidos jamás han ayudado a establecer o restablecer la democracia a nadie:

de este rebozo, de este sobredorado con el que se hacen aquí las cosas. El Tratado con los Estados Unidos no se ha debatido, no se ha discutido. El examen que ha requerido meses por parte del Senado de los Estados Unidos, declaraciones de testigos, análisis minucioso del presupuesto, aquí se ha saldado en una sesión de cuatro horas donde lo que menos importaba era el Tratado en sí, sino una serie de problemas de política interior y de querrelas de familia. Nadie ha tenido o podido decir nada acerca de las bases, acerca de los riesgos de meterse en una guerra mundial que puede suponer este Tratado: nadie ha discutido el precio, el pago, las condiciones de establecimiento de fuerzas militares de otro país, la capacidad del nuestro para limitar el uso de las bases y sus anejos o suspenderlo cuando no coincida con nuestra política exterior. Suponemos que todo ello lo habrán defendido, y bien defendido, las auto-

Eduardo Haro Tecglen

ta reacción de los países del Tercer Mundo, un problema de escasez y de carestía en las materias primas, manipulado convenientemente por Estados Unidos para zafarse de la crisis, han devuelto a las naciones occidentales su problema de ricos y pobres, de mal reparto de la escasez y la carestía: reaparece la lucha de clases y, con ella, los partidos comunistas. Habían sido desdichados en la época de la abundancia porque no podían levantar revoluciones; se les había comenzado a sacar del "ghetto" para corresponder a la situación final de la guerra fría y se les había obligado a modificar sus objetivos para inscribirse en la democracia. Aquí están otra vez, en los países donde la estabilidad económica es menor, representando de nuevo la vanguardia de la clase obrera; y aquí está de nuevo la "Santa Alianza" para contenerlos. La advertencia a Italia es seria. Tiene un sentido, como lo tiene la llamada indiscreción de Schmidt, a quien no ha importado representar el papel de "hombre malo". La indiscreción tiene por objeto que se sepa. No hay amenaza válida si no se le da publicidad.

Hay intervenciones peores. En el Líbano son armadas. Las armas de Siria y de las derechas libanesas, con las que se está diezmando y acorralando a la izquierda musulmana y a los palestinos, son de la OTAN. Y de los Estados Unidos. Son armas firmadas. Las entrega Israel directamente; indirecta o clandestinamente pueden llegar de otros países. Con esas armas se va a llegar a la desaparición del Líbano como país, a la extinción de la resistencia palestina. Con la indiferencia, declarada o fingida, de otros países árabes. O algo más que indiferencia: beneplácito. Podrán tener palestinos refugiados como mano de obra barata y podrán quitarse de encima a los aguafiestas que impiden a los Gobiernos árabes pactar con Israel y con Estados Unidos.

Junto a todo esto, la "intervención" en la política española que

la guerra europea y su intervención tenía un sentido imperial que resultó de gran eficacia. Los sucesivos Gobiernos y presidentes de los Estados Unidos han ayudado a mantener autocracias de diversas formas, muchas veces terribles y sangrientas, en cuatro quintas partes del mundo. El régimen español contra cuyas fórmulas que permanecen se manifiestan ahora los senadores de Estados Unidos, con una cuidadosa fórmula que no im-



Marcelino Oreja, durante la sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores encargada de ratificar el tratado con USA: la acogida no pudo ser más fría.

pide, suspende o modifica el Tratado, ha sido sostenido por los Estados Unidos. Como parte de su política anticomunista o de conflicto nacional frente a la URSS. El régimen español ha aceptado esa intervención porque no la ha considerado como tal, puesto que coincidía con sus propios designios de posguerra y con su conveniencia, sino como una alianza. La fórmula añadida por el Senado puede considerarse como una hipocresía; y como una hipocresía más la protesta de apariencia patriótica y nacionalista que han elevado algunas voces en las Cortes. Todo dentro

ridades civiles —el Ministerio de Asuntos Exteriores— y las militares que han intervenido en el Tratado. Lo suponemos porque queremos: no porque se haya debatido. Cuatro horas, y en paz. Podremos suponer, si queremos, que no sea tan satisfactorio y tan conveniente como se dice por una sola frase del ministro de Asuntos Exteriores, señor Oreja: "No se hace la política exterior que se quiere, sino la que se puede". Es realista y es oportuna. Es indudablemente aceptable su tesis general de que "el Gobierno no tiene que dar cuenta de reforma política más que a nuestro



propio pueblo. La representatividad de nuestras instituciones no puede someterse al juicio de ningún país, y la única homologación válida es la que resulte de la voluntad, libremente expresada, de todos los españoles". Lástima, sin embargo, que este Tratado no haya salido de la voluntad de todos los españoles, que no ha sido libremente expresada por ahora; lástima que no se dé cuenta suficiente de la reforma al pueblo. No es discutible, tampoco, la enmienda Fernández de la Mora, añadida a la ratificación: "Sería contrario al Derecho Internacional cualquier condicionamiento que suponga la injerencia o fiscalización de asuntos internos que son de la exclusiva competencia del pueblo español". A no ser la que intentó el señor Esperabé que, según un cronista de Cortes, "mostró su asombro porque personas procedentes de un régimen apoyado por los americanos alegan ahora injerencia de éstos, por expresar su opinión sobre el sistema español. Sin aquella injerencia, el señor Fernández de la Mora no habría sido ministro". El señor Esperabé debe vivir en un asombro perpetuo. La vida política española los proporciona sin cesar. En realidad, la enmienda Fernández de la Mora tiene escasamente que ver con la fórmula añadida por el Senado americano y con las supuestas injerencias o intervenciones. Se trata simplemente de que las Cortes no acep-

ten en ningún caso un escrito en el que se habla de la restauración de la democracia y de los sistemas parlamentarios y representativos. Y que no puedan en ningún caso referirse a ellos ni los senadores, ni nadie, en el caso de que no haya, de que continúe sin haber, un sistema democrático y representativo en España.

Sobre este debate, con su pequeña tirantez y con su real ausencia de debate de fondo, con el absentismo de procuradores importantes, sin votos en contra, quedará siempre pesando una frasecilla del que fue hasta hace poco ministro de Asuntos Exteriores de España, señor Areilza, en unas declaraciones hechas a "El País". Tras una explicación de la voluntad democrática de Estados Unidos hacia España —inevitable en quien ha sido embajador de España en Washington cuando se formularon los primeros acuerdos y en quien como ministro de Asuntos Exteriores ha conseguido elevarlos a Tratado, completando así una obra que a muchos nos parece lamentable, y que puede tener, si se quiere, una resonancia democrática en Estados Unidos, pero que se esbozaron, redactaron, elevaron y ahora ratificaron sin la menor participación del pueblo español—, el señor Areilza se refiere a otro tipo de injerencias, a la de "algunos hilos de la CIA" que cayeron de la madeja de Watergate, en colaboración con al-

gún "aventurero" sin duda español. Dicho esto por alguien tan discreto y tan diplomático, y tan profundamente conocedor de la política interior y exterior española, y especialmente de las relaciones con Estados Unidos, nos parece tener una importancia trascendental. No creemos que el señor Areilza pueda callar esa intervención. Incluso un juez, un fiscal, podrían preguntarle datos concretos; podría exigirselos la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cortes. No se debe hablar en vano de injerencias de la CIA en colaboración con aventureros españoles, aun cuando se trate de minimizar el caso. Sobre todo, en un país tan puntilloso para la cuestión de la "disciplina internacional" en materia de actividades políticas. En este caso se trata de un delito que atañe a la soberanía nacional: no debe dejarse en una simple alusión dentro de unas declaraciones generales hechas a un diario.

En cuanto al tema general de la no injerencia en asuntos interiores de un país, ¿cómo no terminar de aceptar que se trata de una frase retórica, de una frase subterfugio? Incluida como está en todos los textos internacionales, y de manera específica y reciente en la declaración de Helsinki, nadie ni nada la respeta. Otras muchas cosas contenía aquella declaración que firmó por España el señor Arias Navarro:

se siguen esperando. Aquí y en otros países. Se seguirán esperando infinitamente. Por eso no puede levantar mucho el ánimo las decisiones gubernamentales de adherirse ahora a los pactos internacionales de derechos sociales y políticos, económicos y culturales, llegando poco a poco al reconocimiento, firma y ratificación —¿la aceptarían estas Cortes?— de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. Ya se ha señalado aquí el caso curioso de que la Declaración Universal figure entre las condiciones de aceptación que la Ley de Asociaciones impone a los partidos, cuando el propio Estado no la ha aceptado todavía —a los treinta años de su promulgación— y cuando se trata de algo que los pueblos deben exigir a sus Gobiernos y autoridades, y no los Gobiernos y autoridades al pueblo —del que son representantes los partidos y asociaciones— que es el beneficiario de estos beneficios. Pero nuestra vida política, nuestro lenguaje, tiene estas paradojas. Por lo demás, la mayor parte de los países occidentales han firmado y ratificado estas declaraciones, y están faltando continuamente a ellas. ¿Por qué habremos de esperar que España vaya a ser una excepción en este comportamiento? ■

